

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAIP/MEGC/224/2022  
RECURRENTE  
VS  
MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Qro., a 8 (ocho) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés). -----

Por recibido el oficio CG/UTAIP/175/2023, de fecha 20 (veinte) de febrero de 2023 (dos mil veintitrés), suscrito por la Licenciada Mariana Pérez de Celis Canseco, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Querétaro, presentando el pretendido cumplimiento a la **Resolución definitiva dictada por esta Comisión** en fecha 29 (veintinueve) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), adjuntando lo siguiente:-----

1.- Copia simple de la captura de pantalla del correo electrónico enviado en fecha 4 (cuatro) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), por la Unidad de Transparencia del Municipio de Querétaro.-----

2.- Copia simple del Acuerdo número CT/02/2023, de fecha 31 (treinta y uno) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), emitido por el Comité de Transparencia del Municipio de Querétaro.-----

Entrando al estudio del pretendido cumplimiento a la Resolución de mérito, esta Comisión ordenó en el Resolutivo **TERCERO**, lo siguiente: -----

**"....."RESOLUTIVOS**

**TERCERO.** "...se **ORDENA** la entrega de la información requerida en los puntos (2), 3 (tres) y 4 (cuatro) de la solicitud de información, o es su caso, presentar **ACTA DE INEXISTENCIA** de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 136 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro": -----

"2. Con fundamento en el artículo 242 fracción I Código Urbano del Estado de Querétaro solicito **COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA** emitida por compañía autorizada a favor de la autoridad municipal correspondiente, por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, calculando al treinta por ciento para garantizar la construcción de aquéllas en el plazo que se fije, con motivo de la **AUTORIZACION DE LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS DELA TORRE 1** e la **UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA "LA CIMA TOWER"** ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar del Aguila, número 450, fracción 2, del Rancho San Antonio, perteneciente a la Delegación Cayetano, en la Ciudad de Querétaro, con clave catastral 140100134168001, que consta en escritura pública 40,104 de la Notaría Pública 32 en la Ciudad de Querétaro.

3. Con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro solicito **COPIA DEL DICTAMEN TECNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACIÓN DE LA TORRE 1** e la **UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA "LA CIMA TOWER"** ubicada en Primera Privada del Marqués de la Villa del Villar del Aguila, número 450, fracción 2, del Rancho de San Antonio, perteneciente a la Delegación Cayetano, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, con clave catastral 140100134168001 o en su caso informe si aún no se cuenta con dicho dictamen técnico.

4. Con fundamento en el artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro solicito **COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA ASAMBLEA DE CONDOMINIOS** que el desarrollador tiene obligación de otorgar en un plazo de sesenta días naturales, para **GARANTIZAR VICIOS OCULTOS** de la obras de urbanización por el término de dos años, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio o en su caso informe si dicha póliza aún no ha sido entregada " (Sic)

Esta Comisión tuvo a bien revisar el Acuerdo del Comité de Transparencia número CT/02/2023, de fecha 31 (treinta y uno) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), en el cual se observa lo siguiente:-----

- I. La Coordinación de Normatividad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible informó a la Coordinación de Gabinete respecto de la Inexistencia de la información por cuanto ve a los puntos 2 (dos) y 3 (tres) de la solicitud de información. -----
- II. Se realizó una ampliación de la inexistencia de la información, únicamente por lo que ve al punto 4 (cuatro) de la solicitud de información, mediante oficio CN/026/2023.-----
- III. Por medio del oficio DDU/COU/FC/290/2023 suscrito por la Dirección de Desarrollo Urbano se detallaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la inexistencia de información, se transcribe a continuación un fragmento de los **Considerandos CUARTO Y QUINTO del Acuerdo de Inexistencia** citado con antelación:-----

*"En contestación al memorándum CN/109/2022, en el cual se turna el folio INFOMEX 220458522000126, en el que se solicita copia de las Pólizas de fianzas, así como del Dictamen Técnico Aprobatorio; ambas de las Obras de Urbanización de la Unidad Condominal denominada "La Cima Tower", ubicada en Primera Privada del Márques de la Villa del Villar del Águila No. 450, en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.*

*Al respecto le informo que una vez realizado el análisis correspondiente a su petición, así como la búsqueda en la información que obra en los archivos del Departamento de Fraccionamientos y Condominios, no se encontró con lo solicitado, toda vez que la Unidad Condominal de acuerdo al proyecto presentado y autorizado, cuenta con sótanos de estacionamiento, por lo que las circulaciones vehiculares y estacionamientos, no se consideran obras de urbanización, sino dentro de la Licencia de Construcción otorgada en su momento, por lo tanto no se emitió una Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.*

*QUINTO.- Por otro lado, en términos de lo dispuesto por el artículo 136, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, resulta que existe la **imposibilidad material para la reposición o generación de la información**, la cual se asienta y justifica dentro del oficio DDU/COU/FC/290/2023, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, resultando en que **los motivos por los cuales no se requirieron las Fianzas materia de los puntos 2 y 4 de la solicitud 220458522000126, es porque el proyecto autorizado para la construcción del condominio "La Cima Tower" no contempla vialidades internas ni obras de urbanización de uso común en su interior, por lo cual no se emitió una Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; así como que ve al Dictamen Técnico Aprobatorio materia del punto 3 de la referida solicitud, este aún no ha sido generado toda vez que no se ha presentado la solicitud correspondiente por parte del desarrollador de conformidad con el artículo 247 del Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo la solicitud un requisito previo e indispensable para la elaboración del Dictamen referido, ya que el Dirección de Desarrollo Urbano no cuenta con facultades para proceder de oficio a la elaboración de dicho Dictamen.**" (sic) -----*

Por lo anteriormente transcrito, tenemos que el sujeto obligado explica las razones por las cuales no se generó dicha información, toda vez que no existe obligación alguna del área responsable para generarla o poseerla en sus archivos.-----

Ahora bien, la persona Recurrente, no realizó manifestaciones a lo entregado por el sujeto obligado; en virtud de ello, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por conforme con el cumplimiento presentado.-----

Sirve de fundamento al cumplimiento de la Resolución dictada en fecha **29 (veintinueve) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós)**, las siguientes tesis y jurisprudencias: -----

**"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU CUMPLIMIENTO DEBE REVISARSE OFICIOSAMENTE, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITA UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA INTERLOCUTORIA DE QUEJA.**

El artículo 58, fracción I, de la [Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo](#) prevé que las Salas, Secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán

requerir y revisar oficiosamente el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, la fracción II de dicho precepto no establece expresamente que la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja interpuesta por el actor, sea revisada oficiosamente por dicha autoridad jurisdiccional. No obstante, esta última porción normativa debe interpretarse a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado se materialicen en su totalidad; es decir, que cabalmente se realicen las conductas de dar, hacer o no hacer ordenadas por la autoridad jurisdiccional. En estas condiciones, si bien es cierto que algunas legislaciones procesales establecen la obligación del juzgador de velar por el pleno cumplimiento de sus determinaciones, para lo cual llevará a cabo oficiosamente los actos necesarios para lograrlo, como sucede con la Ley de Amparo, también lo es que otras contienen un principio de impulso procesal de las partes, comprensible por su propia naturaleza, como sucede en los procesos mercantiles. Así, el intérprete de la norma habrá de analizar el sistema normativo correspondiente, según sus características, para determinar cuál es la situación que prevé en el caso concreto. De esta manera, la fracción I del precepto 58 citado, que establece la revisión oficiosa del cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe servir de base para llenar la laguna normativa de la diversa fracción II. Por tanto, para hacer efectivo el principio señalado, aun cuando el actor no desahogue la vista otorgada para manifestarse sobre el cumplimiento dado a una interlocutoria de queja, ello no es impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise oficiosamente si la autoridad demandada acató el fallo de nulidad y el de la queja. Esto es, la omisión de desahogar la vista aludida podrá tener repercusiones como la preclusión procesal, pero, se insiste, no al grado de que la Sala, Sección o el Pleno omita analizar si se acató o no su sentencia.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 103/2017 (cuaderno auxiliar 880/2017) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cerro Fresh, S. de R.L. de C.V. 11 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretaria: Norma Alejandra Cisneros Guevara. Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación..."<sup>1</sup>

**“CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. NO SE SATISFACE PLENAMENTE CON LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE ESTIMÓ ILEGALMENTE DESECHADO, SINO HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.**

El artículo 10, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de progresividad, que implica no sólo la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual; lo que exige de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los Derechos Humanos de quienes se someten al orden jurídico. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se

<sup>1</sup> Tesis (I Región) 80. 57 A (10a.): Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 53, Abril del 2018, p. 2382. Reg. Digital 2016642.

encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento. En ese contexto constitucional, el juez federal debe velar por el cumplimiento del fallo protector, pensando en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones con un sentido pragmático; y no dar por cumplida la sentencia cuando el justiciable se encuentre prácticamente en la misma situación jurídica que cuando promovió el juicio de garantías, esto es, en espera de que la autoridad resuelva el recurso administrativo que promovió ante ella. En estos casos, los juzgadores de amparo deben adoptar de oficio todas las medidas necesarias para lograr la ejecución de la sentencia, pero con una finalidad práctica, pues en caso contrario la decisión adoptada en el fallo protector y los derechos que en ella se reconocieron, se reducen a meras declaraciones de intención sin un alcance verdaderamente útil, ni efectividad alguna en cuanto a la finalidad de las sentencias en el juicio de amparo, que es la de hacer respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución frente a un acto arbitrario de autoridad. En ese sentido, cuando en la ejecutoria de amparo se determine violado el Derecho Humano a la Tutela Judicial Efectiva, con motivo del ilegal desechamiento de un recurso administrativo, en el cual no se ofrecieron pruebas de especial desahogo, la protección constitucional debe obligar a la autoridad responsable no sólo a dejar sin efectos el acuerdo por el cual se negó a darle trámite, ni estimarla cumplida con la admisión del recurso, sino también a que provea lo conducente a la resolución del medio de defensa administrativo, así como lo relativo a la ejecución de las determinaciones ahí alcanzadas cuando sean favorables y conforme a las intenciones del particular; pues en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 10., párrafo tercero, de la Constitución Federal, sólo de esta forma se restituirá al quejoso en el goce del Derecho Humano a la Tutela Judicial Efectiva.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Recurso de inconformidad 17/2016. María Guadalupe Valdés Hernández. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña.<sup>2</sup>

#### **"CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA".**

Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberán abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar

<sup>2</sup> Tesis (IV) 10. A 65 A (10a.): Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Libro 36, Noviembre del 2016, p. 2356. Reg. Digital 2013176.

un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.

Inconformidad 446/99. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 28 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Inconformidad 277/2000. Manuel Díaz Muñoz y otros. 4 de agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

Inconformidad 343/2000. Salvador Leopoldo Vanda Soler y otro. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Moisés Muñoz Padilla.

Inconformidad 255/2000. Moisés Rubio Caro. 13 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

Inconformidad 418/2000. 6 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

Tesis de jurisprudencia 9/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil uno.

Nota: En términos de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil uno, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de varios 3/2001-SS, relativo a la aclaración de la presente tesis, ésta se publica nuevamente en

A C T O R A C I O N E S

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001,  
página 366.<sup>3</sup>

En conclusión, respecto al **Resolutivo TERCERO**, de la Resolución de mérito, tenemos que el Sujeto Obligado cumple con fundar y motiva la inexistencia de la información respecto a lo requerido en la solicitud de información ya referida; en consecuencia, **se ordena el archivo del presente expediente** en que se actúa **como asunto totalmente concluido**. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. -----

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN LA LISTA DE LOS ESTRADOS DE ESTA COMISIÓN.- El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en la **Quinta Sesión Ordinaria de Pleno** de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro de fecha **8 (ocho) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés)** y se firma el día de su fecha por EL C. JAVIER MARRA OLEA, COMISIONADO PRESIDENTE, LA C. ALEJANDRA VARGAS VÁZQUEZ, COMISIONADA PONENTE Y EL C. OCTAVIO PASTOR NIETO DE LA TORRE, COMISIONADO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, quienes actúan ante la C. DULCE NADIA VILLA MALDONADO, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN, quien da fe.- DOY FE. -----

  
ALEJANDRA VARGAS VÁZQUEZ  
COMISIONADA PONENTE

  
JAVIER MARRA OLEA  
COMISIONADO PRESIDENTE

  
OCTAVIO PASTOR NIETO DE LA TORRE  
COMISIONADO

  
DULCE NADIA VILLA MALDONADO  
SECRETARIA EJECUTIVA

SE PUBLICA EN LISTAS EL DÍA 9 (NUEVE) DE MARZO DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS). CONSTE. --  
LGR

<sup>3</sup> Tesis 2a./J.9/2001: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, p. 203. Reg. Digital: 190331.